

A los españoles les va regular

Ricardo Santana Santana

Aunque en España algunos parecen tener la impresión contraria, el bienestar de la ciudadanía no se mide por la cantidad de broncas sobre la soberanía o el tamaño de las banderas que esgrimen unos contra otros. A los ciudadanos les va bien cuando tienen empleos decentes o están a cubierto ante los imprevistos laborales, cuando la riqueza se reparte de forma equilibrada y esa redistribución se emplea para proveer de servicios públicos eficientes a la población. El club de fans del señor Aznar nos ofrece la disminución del desempleo como el principal argumento para demostrar lo bien que les va a los españoles. Ciertamente el paro ha disminuido. Aunque contribuye mejor a describir la sociedad saber cuántos españoles trabajan que cuántos buscan un trabajo: cuando el PP llegó al gobierno trabajaba el 50% de la población entre los 15 y los 64 años; hoy lo hace el 58%. Es innegable tanto la mejora como lo

lejos que continuamos estando de las economías que más trabajo proporcionan a sus ciudadanos: en Islandia trabaja el 84%, en Suiza el 79%, en Noruega el 77%, en Dinamarca y Suecia el 75%...¹

Claro que, además de que la gente pueda trabajar, conviene saber cuánto y cómo lo hace. La cantidad de horas que los españoles trabajamos cada año, 1.816, no ha disminuido desde que el señor Aznar alcanzó la cima. Quiere ello decir que aquí tenemos que consagrar una cantidad de tiempo al trabajo que es un 24% superior a la que dedican los alemanes, o un 35% mayor que la de los holandeses o los noruegos, que trabajan unas 1.350 horas al año. Resulta obvio que en este país el trabajo se reparte muy mal: la mayor cantidad de horas trabajadas por la mayoría contribuye a mantener el más alto desempleo de Europa. En España hay que trabajar bastante más para obtener, además, unos salarios de los más bajos de la Unión Europea, y con unas condiciones laborales peores que las de casi todos esos países, como lo demuestra el hecho de que tripliquemos el porcentaje de trabajo temporal de la media de los países de la OCDE².

La afirmación de la derecha de que, en este aspecto, a los españoles les va bien, sólo cobra sentido si se entiende como una referencia al sexo. Porque a las españolas les resulta mucho más complicado trabajar. Si separamos las cifras por sexos, vemos que trabaja el 73% de la población masculina y tan sólo el 43% de las mujeres. Y aquí sí que la distancia con los países más desarrollados es de escándalo, puesto que en

El bienestar no se mide por la cantidad de broncas sobre la soberanía o el tamaño de las banderas que esgrimen unos contra otros

1. Todos los datos estadísticos de este texto, salvo mención contraria, corresponden a las cifras más actuales ofrecidas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

2. Manuel Castells, *La era de la información. Vol. 1. La sociedad red*, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 325.

los países nórdicos trabaja entre el 71 y el 81% de las mujeres. Pero no sólo es que trabajen más mujeres, sino que también la diferencia entre sus sueldos es menor: en España, ellas ganan un 30% menos que ellos, mientras que esa diferencia oscila entre el 10 y el 12% en países como Bélgica, Dinamarca o Francia. Así que en España, el único país del continente que carece de derecha, porque aquí hasta los ultras son de centro, se continúa discriminando a las mujeres más que en el resto de Europa.

El reparto de la riqueza es otro aspecto fundamental que afecta al bienestar de la mayoría de la población. Conviene fijarse en cómo se obtienen los ingresos públicos y cómo se emplean para mejorar las condiciones de los más necesitados. Sobre el primer aspecto, resulta obligado afirmar que los impuestos han subido. Han disminuido los impuestos sobre la renta y los que gravan las plusvalías del capital, es decir, los impuestos que pagan los más privilegiados, pero se han elevado los que pagamos todos, los impuestos indirectos. Tanto que, pese a las promesas de los populares, la presión fiscal en este país ha aumentado considerablemente (un 2% del PIB).

No obstante, en España continúan pagándose pocos impuestos. La presión fiscal supone el 32,8% del PIB, de la riqueza generada cada año en el país, frente al 38,2 de la media de los países desarrollados, los de la OCDE. Si la comparamos con los más civilizados, con los escandinavos –donde los impuestos suponen del 50 al 60%–, la distancia es increíble. Así se expli-

ca la precariedad de los servicios públicos que presta aquí el Estado. Independientemente de los ingresos, los resultados dependerán también de las políticas aplicadas. En España se ha plasmado con claridad, en estos seis años, cómo se gobierna desde la derecha: una subida de los impuestos y una disminución de los gastos sociales del Estado, dedicando el superávit de ambas partidas a disminuir el déficit público. Asunto que les preocupa mucho más que el bienestar de la mayoría de la población.

Desde 1994 a 2001, el porcentaje de la riqueza destinado al gasto público en partidas consideradas sociales ha pasado del 24 al 20%³. Este dato es uno de los que más claramente muestra cómo un gobierno de derechas contribuye a empeorar la vida de las clases populares. Porque sus consecuencias sobre los servicios públicos que presta la Administración a los ciudadanos son funestas, más en una sociedad en la que el Estado del bienestar era ya raquítico comparado con el resto de los miembros de la Unión Europea.

La salud constituye el primer indicador para saber si a los españoles les va bien. Y el hecho de que el gasto público en sanidad haya disminuido durante el gobierno del PP ha provocado un deterioro de la calidad de vida de todos aquellos que no pueden sufragarse la sanidad privada complementaria. La sanidad pública española ha empeorado. Por ello resulta lógico que sólo dispongamos de 4,1 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, frente a las 18 de Suiza, las 16,5 de Japón o las 14,6 de que disfrutaban los norue-

Han disminuido los impuestos que pagan los más privilegiados, pero se han elevado los que pagamos todos

3. Vicenç Navarro, *Bienestar insuficiente, democracia incompleta*, Anagrama, Barcelona, 2002, p. 158.

gos. Así se explican esas listas de espera que han alcanzado en este país proporciones tercermundistas. La precariedad del sistema público de salud explica también que en España mueran 4,6 niños de cada 1.000 que nacen, mientras que en Islandia sólo fallecen 3, en Japón 3,2 o en Suecia 3,4.

Con la enseñanza ocurre otro tanto. España es el segundo país de Europa con mayor fracaso escolar⁴ y los indicadores internacionales muestran la pobreza de los resultados académicos de los estudiantes españoles con respecto a los de otros países. No es posible que los jóvenes españoles puedan disfrutar de una educación digna cuando el gasto público destinado a este menester es prácticamente la mitad del que dedican países como Suecia, Noruega o Dinamarca. Máxime, además, cuando parte de ese escuálido gasto se está dirigiendo a la enseñanza privada en detrimento de la pública, la que utiliza la inmensa mayoría de la población.

El otro gran apartado que contribuye al bienestar de la ciudadanía es el que en los últimos tiempos se denomina servicios a las familias. Aquí es donde más alejados nos encontramos de los países más avanzados. La atención a la infancia es mínima: tan sólo el 5% de los niños de 0 a 3 años dispone de guarderías. Cifra ridícula si la comparamos con el 64% de los niños atendidos en Dinamarca. También la atención a la tercera edad es deplorable: apenas existen centros residenciales y la atención domiciliaria es una práctica casi desconocida en nuestro país. En Suecia, una persona mayor que se

encuentre enferma tiene derecho a cinco visitas diarias a su domicilio, en las que le hacen la comida y le atienden en lo que necesite; en España, eso parece una utopía. Los jóvenes no pueden independizarse debido a un desempleo juvenil desconocido en el resto de la Unión, a la precariedad del trabajo cuando lo encuentran, y a la ausencia de vivienda asequible, situación que se ha agravado a causa de la radical disminución de viviendas de promoción pública desde que la derecha accedió al gobierno.

El hecho de que la seguridad constituye un componente del bienestar resulta innegable, pero cuando se habla de seguridad ciudadana nos deberíamos estar refiriendo, entre otras, a las cuestiones planteadas anteriormente. Sin embargo, a veces parece que la seguridad de una persona se circunscribiera a que no le roben. Los efectos de la política del PP son claros: 6.000 policías públicos menos, 26.500 privados⁵ más y un sustancial incremento de la población reclusa, hasta alcanzar los 110 encarcelados por cada 100.000 habitantes. Mientras, las sociedades con políticas sociales más orientadas a la cohesión y al bienestar de la población parecen tener menos necesidad de encarcelar gente: en Noruega la cifra es de 47, en Finlandia 55, en Suecia 57, en Dinamarca 65...

De estos datos pueden extraerse bastantes conclusiones. Algunas podrían ser las siguientes:

La primera: *no todos son iguales*. Cierto que los innegables avances durante los gobiernos socialistas fueron claramente insuficientes,

La tarea de cualquier izquierda digna de tal nombre pasa por elevar los impuestos para sufragar la mejora del Estado del bienestar

4. Eurostat, 2002.

5. *El País*, 26 de septiembre de 2002.

Los países más 'globalizados' del mundo, los países nórdicos, son los mismos que poseen los mejores Estados del bienestar del planeta

pero no es lo mismo que gobierne la derecha que la izquierda. El *colocón* ideológico que impide percibir la diferencia entre el PP y el PSOE, a quienes se sitúan en el reino de los cielos de la izquierda, conduce a ignorar las serias consecuencias del gobierno de la derecha para las clases populares de este país.

En segundo lugar, la política española se sitúa notablemente a la derecha de la de la mayoría de los países europeos. El desmantelamiento del precario Estado del bienestar hasta el punto en que lo lleva el PP no lo ha llevado ningún otro gobierno de la derecha europea. De la misma forma, las propuestas políticas más homologables con las de la socialdemocracia europea parecen entre los socialistas españoles radicalismo de izquierdas.

Tercera. En un país donde la presión fiscal es tan escasa como los servicios públicos, la tarea de cualquier izquierda digna de tal nombre pasa por elevar los impuestos, e incrementar su progresividad, para sufragar la mejora del Estado del bienestar que nos acerque a la convergencia real con el resto de la ciudadanía europea.

Cuarta. La existencia de gobiernos en Europa que están manteniendo, e incluso expandiendo, el Estado del bienestar niega la imposibilidad de hacerlo amparándose en los límites que impone la globalización. Es falso que las políticas reaccionarias de la derecha española vengán obligadas por la necesidad de competir globalmente. Idea que parece apoyada en no pocas ocasiones por las exageraciones que se vierten desde el

movimiento 'antiglobalización'. La realidad es que los países más 'globalizados' del mundo, los países nórdicos –donde la importancia del comercio exterior es mayor para sus economías–, son los mismos que poseen los mejores Estados del bienestar del planeta. Las políticas nacionales continúan siendo la clave de una política económica al servicio del bienestar de los ciudadanos.

Por último, en los países más avanzados de Europa se produce un nivel de participación de la sociedad desconocido en España. La participación electoral suele oscilar entre 10 y 20 puntos porcentuales por encima de la nuestra. De hecho, la mayoría absoluta obtenida por el PP no se debió fundamentalmente al aumento de sus votos –que no crecieron más que un 1% del censo electoral–, sino al importante aumento de la abstención entre los votantes de izquierdas. Asimismo, entre todos los países de la OCDE, España es en el que los ciudadanos participan menos en cualquier tipo de colectivos o asociaciones.

En consecuencia, mejorar el bienestar de los españoles –tratar de evitar la prolongación de las políticas del PP– es tarea y responsabilidad que incumbe a todos los que se consideran de izquierdas, y pasa por un incremento de su participación en la sociedad, tanto electoral como ciudadana.